



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, septiembre 14 de 2022

AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI – VALLE DEL CAUCA Correo: dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
DEMANDADO:	EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN Correo: notificacionesjudiciales@saludcoop.coop ajabogados.saludcoop@gmail.com larellano@aja.net.co SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2017-01595-00

ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE Y MEMORIALES.

En aras del cumplimiento del artículo 46¹ de la Ley 2080 de 2021 que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, las partes cuentan con los documentos necesarios para formular sus alegaciones en la medida en que fueron notificados de todas las actuaciones surtidas en el proceso y se surtieron los correspondientes traslados.

La **Ley 2080 del 2021**, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El **expediente físico** fue digitalizado y puede consultarse en el repositorio **MERCURIO**, previa solicitud de acceso al siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU>. En el siguiente link encontrará un video tutorial para el ingreso: <https://bit.ly/3BQHMIln>.

El **expediente digital** está en la sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón “**CONSULTA DE PROCESOS**” en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

¹ Artículo 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

Las partes y SIIS apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite. Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para tal efecto, se deberá incorporar lo referente a la sede judicial electrónica, ; formas de identificación y autenticación digital para los sujetos procesales, interoperabilidad, acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales, tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, expediente judicial electrónico, registro de documentos electrónicos, lineamientos de cooperación digital entre las autoridades con competencias en materia de Administración de Justicia, seguridad digital judicial, y protección de datos personales.

Parágrafo. En el evento que el juez lo considere pertinente, la actuación judicial respectiva podrá realizarse presencialmente o combinando las dos modalidades.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán **RADICAR MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es el canal oficial para recibir memoriales** a partir del **16 de mayo de 2022.**

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo "Solicitudes y otros servicios en línea", dar clic en "Acceso a expedientes" aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo "Solicitudes y otros servicios en línea", dar clic en "Memoriales y/o Escritos", aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso **y cargar los archivos con destino al proceso** en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI VENTANILLA VIRTUAL

Solo de manera subsidiaria continuarán recibándose escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

I. OBJETO DE LA DECISION

1.1. Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar, formulada por la parte demandante, con la que pretende suspender provisionalmente los efectos de los siguientes actos administrativos:

- Resolución No. 1945 del 22 de diciembre de 2016, proferido por SALUDCOOP EPS en liquidación, " POR MEDIO DE LA CUAL LA AGENTE ESPECIAL LIQUIDADORA DE SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON EL NIT 800250119-1 ORDENA EL PAGO DE LAS RECLAMACIONES PRSENTADAS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS DE MATERNIDAD E INCAPACIDADES).
- Resolución No. 1966 del 20 de abril de 2017, expedida por SALUDCOOP EPS en liquidación, "POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PRESENTADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN 1945 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE RECONOCIÓ PRESTACIONES ECONOMICAS".
- Oficio SCoopL-0029520 del 01 de agosto de 2017, proferida por SALUDCOOP EPS , en liquidación , "pone en conocimiento el cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, en providencia del 04 de julio de 2017".
- Oficio SCoopL-0029566 del 17 de agosto de 2017, emitida por SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN "Respuesta petición presentada por la señora CLARA INES RAMIRES SIERRA quien actúa en calidad de Representante Legal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, recibida en esta entidad

por correspondencia bajo los PQR-SC-142026 del 09/08/2017 y PQR-SC-142070 DEL 10/08/2017".

- Resolución No. 1982 del 17 de agosto de 2017 emitida por SALUDCOOP EPS en liquidación " POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA LA RESOLUCIÓN 1966 DE 20 DE ABRIL DE 2017 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE la tutela 2017-00075".
- Oficio SCoopL-0030430 del 21 de septiembre de 2017 emitido por SALUDCOOP EPS en liquidación "respuesta derecho de petición".
- Y de todas las demás actuaciones administrativas derivadas de las anteriormente enunciadas.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

2.1. Adujo la parte demandante que, se observa la flagrante violación a las normas y derechos invocados en la presente demanda, la cual esta razonablemente fundada en Derecho, tiene la titularidad de los derechos invocados y demostró de manera clara, directa y precisa la vulneración de las normas y derechos fundamentales.

2.2. Explicó que, la medida cautelar es necesaria y urgente, en razón al grado de afectación de los intereses de la entidad demandante, como quiera que fue excluida del proceso liquidatorio y ello repercute en la pérdida de la oportuna recuperación de recursos públicos que fueron cobrados de forma legítima por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, los cuales fueron inicialmente cobrados ante Saludcoop con anterioridad al proceso liquidatorio y luego debidamente presentados como acreencia ante el liquidador con acompañamiento de la gestora empresarial de Saludcoop, acreencias que luego por el ente liquidador fueron rechazadas por fuera del marco normativo señalado en la demanda.

2.3. Señaló que se busca evitar un perjuicio irremediable en contra de la Entidad en razón a que se trata de recursos públicos que por las circunstancias del caso, deben ser protegidos por este medio. Reiteró que lo solicitado es que se suspenda el proceso liquidatorio, de lo contrario continuaría la vulneración al Debido Proceso.

III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

3.1. Conforme con las actuaciones surtidas en la plataforma SAMAI, se tiene que, la Superintendencia Nacional de Salud y SALUDCOOP en liquidación guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

4.1.1. El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Es procedente decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, toda vez que en concepto de la parte demandante quebranta el Debido Proceso y Derecho de Defensa,

por lo que debe suspenderse todo el proceso liquidatorio y la continuidad de los trámites administrativos de reclamación?

Para resolver el problema jurídico, se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, de la suspensión provisional, las medidas preventivas y luego aplicarlo al caso concreto.

4.2. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

4.2.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

4.2.1.1. El artículo 238 de la Constitución Política establece:

“ARTICULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”

4.2.1.2. La Corte Constitucional, en sentencia C-834 de 2013 se pronunció respecto a la finalidad de las medidas cautelares, de la siguiente manera:

“(…) Las medidas cautelares, son aquellos mecanismos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la Ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (...)” .

4.2.1.3. Por su parte, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. Además, indicó que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte - debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

4.2.1.4. El CPACA en su artículo 230 clasificó las medidas cautelares como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso

contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

4.2.1.4. Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

4.2.1.5. En providencia del 31 de mayo de 2019, el Consejo de Estado – Sección Primera, C.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, radicación número: 11001-03-24-000-2014-00682-00, recordó en cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para adoptar una medida cautelar lo siguiente:

“En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “podrá decretar las que considere necesarias” . No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla” (Resaltado fuera del texto).

4.2.1.6. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

“[...] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho [...]” (Negrillas fuera del texto).

4.2.1.7. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

“[...] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad [...]” (Negrillas no son del texto).

4.2.1.8. Se tiene entonces que, en el examen de procedencia de la medida cautelar solicitada, debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) *fumus boni iuris*, o apariencia de buen derecho, (ii) *periculum in mora*, o perjuicio de la mora, y, (iii) la ponderación de intereses.

4.2.2. LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL ACTO ACUSADO – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:

4.2.2.1. Como se dijo en líneas anteriores, la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado tiene su fundamento constitucional en el artículo 238 de la C.P. y su trámite, procedencia y demás requisitos se desarrolla en los artículos 229 y ss del CPACA.

4.2.2.2. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesorio, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.

4.2.2.3. Para la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos la Ley 1437 de 2011 indica que debe referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas.

4.2.2.4. El Consejo de Estado – Sección Primera, en providencia del 31 de mayo de 2019, C.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, anteriormente citada, recordó los postulados de la providencia del 13 de mayo de 2015 y señaló que:

“(...) la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio (...)”.

4.2.2.5. Tal visión ha sido compartida por la precitada Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto del 27 de agosto de 2015, en el cual subrayó lo siguiente:

“(...) En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar)”.

4.2.2.6. Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este análisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), sostuvo:

“(…) Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2° del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final (....)” (Resaltado fuera del texto).

4.2.2.7. Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar, de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia del Consejo de Estado – Sección Primera, se trata de “mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto” .

4.2.3. LA MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA

4.2.3.1. Tal como se señaló en precedencia, conforme al artículo 230 del CPACA las medidas cautelares son de naturaleza preventivas (num. 4), conservativas (num. 1 primera parte) anticipativas o de suspensión (nums. 1 segunda parte, 2 y 3). En este orden de ideas, la norma ibídem enumera las posibles medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas.

4.2.3.2. La cautela negativa por excelencia es la suspensión provisional, cuando el objeto de control es un acto administrativo. Las cautelas positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la Administración: hechos u operaciones administrativas, y dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo.

4.2.3.4. Respecto de las medidas preventivas, estas tienen por finalidad evitar que se configure un perjuicio o se vulneren los derechos del demandante. La Ley 1437 consagró, dentro los procesos contencioso-administrativos, un procedimiento que tiene por finalidad evitar la inejecución de la sentencia, esto es, diseñó un proceso cautelar que se torna en instrumental del proceso principal, que corresponde no solo a lo previsto en el artículo 238 de la Constitución Política sino también busca realizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

4.2.3.5. Así, las medidas cautelares preventivas buscan proteger la realización de las decisiones judiciales, ya que permiten que el objeto del juicio permanezca inalterado durante el trámite del proceso, pues de lo contrario el restablecimiento del ordenamiento jurídico por medio de la sentencia sería puramente formal y no material.

4.2.3.6. Por ende, para su decreto se requiere que: (i) exista la apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados; (ii) que se efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que

concederla, y (iii) que exista peligro para la efectividad de la sentencia, esto es, que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nugatorios .

4.3. CASO CONCRETO:

4.3.1. En este caso concreto se solicita la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados y de todo el trámite liquidatorio, tal como se señaló en el recuento normativo y jurisprudencial, en el examen de procedencia de la medida cautelar solicitada debe verificarse la concurrencia de los elementos que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) *fumus boni iuris*, o apariencia de buen derecho, (ii) *periculum in mora*, o perjuicio de la mora y (iii) la ponderación de intereses.

4.3.2. Se procederá a establecer si se cumplen cada uno de los ítems en el caso concreto.

4.3.3. APARIENCIA DE BUEN DERECHO:

4.3.4. Respecto del *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho, dicho requisito consiste en que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas, que el demandante haya demostrado así sea sumariamente y se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho.

4.3.5. La parte demandante consideró en el presente asunto que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, en razón a una serie de actuaciones que se dieron en el proceso liquidatorio , aunado a que a pesar que por medio de un fallo de tutela se ordenó valorar nuevamente una acreencia, Saludcoop en liquidación incluyó nuevas inconsistencias sin otorgar los recursos legales, lo que afecta su Debido Proceso.

4.3.6. Analizando el caso concreto, se observa que ,la parte demandante realiza una serie de interpretaciones que considera erróneas por la entidad demandada, analiza las pruebas aportadas y considera que existió afectación a su Debido Proceso, en síntesis porque en el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN se está valorando una acreencia, a la cual se le ha sumado una serie de inconsistencias sin otorgar los recursos legales, así las cosas, lo anterior requiere de la revisión de todo el proceso liquidatorio, de la calificación realizada a la acreencia que se encuentra en disputa, analizar los supuestos fácticos que dieron origen a la acción de tutela que ordenó valorar nuevamente la acreencia, estudiar si podía la entidad demandada realizar las nuevas inconsistencias ante la orden judicial de tutela y si era la etapa procesal para la concesión o no de los recursos de Ley, situaciones que no se manifiestan a prima facie si no que requieren de un análisis que no es propio de esta etapa procesal.

4.3.7. Por lo anterior, el primero de los requisitos que se exige para ordenar una medida cautelar como es la apariencia de buen derecho, no se configura en este asunto, toda vez que se requiere de un examen exhaustivo no solo de las pruebas aportadas sino también de las normas aplicables al caso concreto, lo que no permite evidenciar con una mera apreciación provisional la violación que se alega.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DESAJ
DEMANDADO SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION Y OTRO
RADICACIÓN: 76001-23-33-001-2017-01595-00

4.3.8. Al no cumplirse dicho requisito, resultaría innecesario resolver los demás como es el perjuicio en la mora y la ponderación de intereses; como quiera que, se reitera no se advierte la existencia o coexistencia de alguno de los requisitos señalados en el CPACA que amerite el decreto de la medida cautelar solicitada pues, no se aprecia violación ostensible respecto de la norma superior a que hace referencia, porque el quebranto alegado por la parte demandante se apoya en circunstancias que se deben elucidar cuando se estudie el fondo del asunto. Se reitera que dicho análisis es propio de una decisión de fondo y sería apresurado decidir en esta etapa procesal la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos demandados como lo pretende la parte demandante, pues, debe agotarse el debate probatorio el cual solo puede realizarse en la sentencia.

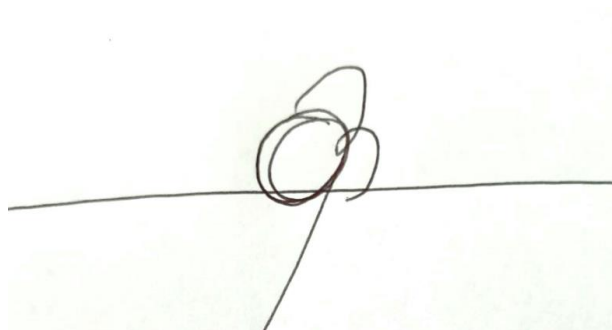
4.3.9. Por lo anterior, el Despacho advierte que no se encuentra acreditado ninguno de los requisitos para que sean procedentes las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, serán negadas.

En consecuencia, se

RESUELVE

NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia ².

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

² PROYECTÓ LPQO.